



ALGUNOS DATOS SOBRE JUVENTUD RURAL EN AMERICA LATINA Y COLOMBIA¹

Santiago, 2010

¹ Documento elaborado por Juan Moreno Belmar y Ariel Villalobos, profesionales de la Corporación Regional Procasur Marzo, 2010.

Contenido

Juventud Rural en América Latina.....	3
Juventud Rural en Colombia	7
1.- Características sociodemográficas de la juventud rural en Colombia.....	7
2.- Educación y trabajo	8
3.- Condiciones materiales.....	10
4.- Violencia, exclusión y derechos	12
5.- Orientaciones de política pública para la juventud	13
Bibliografía	15

Juventud Rural en América Latina

El papel de las nuevas generaciones es un tema de relevancia principal para el desarrollo económico y social de las áreas rurales de América Latina. Los países de la región en su conjunto están posicionados ante oportunidades y desafíos de gran envergadura, que demandan la incorporación de cada vez mayores capacidades de innovación, adaptación y flexibilidad. La apertura económica, la eliminación de barreras arancelarias y el retroceso del Estado como garante de protección social, requieren desde la sociedad un dinamismo y un manejo de códigos absolutamente nuevos, ante los cuales el mundo rural no puede excluirse.

Las juventudes como portadoras de capital humano valioso, tanto por sus niveles educativos más altos, como también por su mejor aceptación al cambio, poseen una potencialidad enorme para revitalizar el campo ante dichos impactos estructurales. Sin embargo, en América Latina, el avance educativo no ha sido suficiente para poder enfrentar situaciones de recesión y desempleo que golpean especialmente a segmentos sociales como los jóvenes, que en sus primeros años en el mercado laboral suelen insertarse bajo condiciones de precariedad y vulnerabilidad. Más aún si se habla de jóvenes rurales, los efectos bruscos pueden ser mayores debido a las fluctuaciones de precios internacionales de los alimentos y las escasas seguridades laborales.

Según estimaciones de la CEPAL, para el año 2005, el número de personas entre 15 y 24 años en América Latina se acercaría a los 32 millones; los cuales representan aproximadamente el 23% de la población rural en su conjunto al interior de la región. La tendencia para las décadas posteriores se estima hacia la baja paulatina, producto de la disminución de las tasas de fecundidad en todos los países, en consonancia además con el desplazamiento hacia la ciudad propio del proceso de transición demográfica. El estado de este proceso, sin embargo, varía generalmente de acuerdo al nivel de desarrollo de los países, sus índices de escolarización y el nivel de participación de la mujer en el mercado laboral. Países como Chile, Cuba y Costa Rica poseen las tasas de fecundidad más bajas de la región debido al mayor avance de los procesos recién mencionados, mientras que Nicaragua, Bolivia y Honduras poseen las tasas más altas, aunque también tienden a disminuir el número de nacimientos.

La reducción de la fecundidad es un proceso que afecta tanto a áreas rurales como urbanas de la región, y pone de manifiesto las nuevas estrategias y cambios culturales al interior de la vida cotidiana de los jóvenes. Específicamente en el caso de los jóvenes rurales, el cambio de los patrones reproductivos, figura un enorme cambio respecto a las formas tradicionales de organización familiar y arreglos nupciales. Todo ello en función de invertir tiempo en educación y formación para la obtención de mejores condiciones de existencia en el futuro, que impliquen la incorporación en trabajos más productivos y mejor remunerados que las generaciones anteriores.

Sin embargo, el aprovechamiento del recurso humano se ha vuelto un tema complejo y difícil de manejar debido a la estrechez de oportunidades educativas y laborales que ofrece el mundo rural para la juventud en América Latina en la actualidad. En promedio, tanto hombres como mujeres poseen en este momento el doble de la educación formal que sus padres. Sólo como ejemplo, países en etapa de transición demográfica avanzada como Costa Rica y Chile, presentan 3,8 y 4,4 años de educación cursados por los padres, mientras que los hijos en promedio han alcanzado 7,1 y 8,8 años promedio en los respectivos países. Situaciones similares se dan para países tan diversos como Venezuela, Brasil, Panamá, Honduras y Colombia.

Este dato tiene una gran importancia al momento de caracterizar las condiciones y oportunidades de las juventudes rurales en América Latina. La educación ha significado, especialmente para las mujeres rurales jóvenes, un salto gigantesco en cuanto a expectativas de vida y oportunidades de romper el círculo de la exclusión y violencia de género. Su mayor éxito y permanencia en el sistema escolar también ha significado que sus posibilidades laborales se amplíen por fuera de los límites del ámbito agrario, y estén mejor capacitadas para integrarse a empleos del sector servicios. Al respecto, es interesante constatar que en comunidades más aisladas y empobrecidas tiende a predominar la emigración masculina, puesto que al existir un menor acceso a la educación, las mujeres no logran ampliar sus horizontes y plantearse abandonar el campo es una posibilidad lejana; al contrario de lo que ocurre en sectores más integrados a la red institucional, donde la emigración femenina es la que marca la pauta (CEPAL)

En cuanto a la pobreza juvenil en sectores rurales, ésta fluctúa enormemente de país en país. Por ejemplo, un 80% de los jóvenes que habitan zonas rurales en Bolivia, son pobres; mientras que esta misma cifra alcanza un 59,4% en México, un 59,4% en Brasil, un 21,9% en República Dominicana y un 11% en Chile. Así, es posible observar que hay lugares donde la proporción es muy alta y otros donde es significativamente menor (CEPAL). La pobreza rural de jóvenes suele ser muy sensible a los grandes ajustes estructurales que se han venido desarrollando el último tiempo en la región. Esto debido a que, por un lado, mientras el agro de baja productividad pierde su competitividad en el mercado, las condiciones laborales se vuelven más inseguras, insatisfactorias y atractivas para los jóvenes. Y, por otro lado, la reducción del papel del Estado también ha implicado en algunas ocasiones la eliminación de programas para juventudes rurales, que muchas veces sirvieron de red de protección frente a las inequidades y riesgos de la implantación brusca del modelo de libre mercado.

Respecto a las ocupaciones de los jóvenes rurales, existe una cantidad importante de varones que tienen un trabajo remunerado, que incluso dobla al porcentaje de mujeres que lo hacen viviendo en el campo. En cuanto a éstas últimas, sus ocupaciones se relacionan más bien con el trabajo doméstico y la participación en el sistema educativo formal. Asimismo, los datos disponibles para esta población demuestran que los varones que dejan de estudiar, generalmente lo hacen para aportar económicamente al hogar; mientras que las mujeres utilizan preferentemente la educación como un puente hacia otros tipos de trabajos. El trabajo remunerado al que tienen acceso este tipo de jóvenes, suele ser de carácter temporal, con escasas condiciones laborales de estabilidad y en ocasiones expone a los jóvenes rurales a la irresponsabilidad empresarial en cuanto a medidas de seguridad física por el uso de químicos y pesticidas perjudiciales para la salud.

La tendencia a la ampliación del período de formación educativa como tendencia general en América Latina y el Caribe es un hecho que no necesariamente lleva a la integración de capital humano mejor calificado al proceso productivo de las áreas rurales. En vista de que las habilidades y destrezas adquiridas en el sistema escolar en general están muy poco relacionadas con las necesidades de desarrollo local, los jóvenes rurales que reciben su educación en la ciudad tienden a quedarse allí. Luego de haber estudiado una cantidad muy superior a la de los padres, quedarse en el campo es una alternativa que no resulta demasiado atractiva en vista de que las labores rurales siguen estando asociadas al desgaste físico excesivo y la escasa retribución económica. De hecho, el estatus de la educación como una válvula de escape a la vida de los padres, es un incentivo adicional para la migración, el envejecimiento de la población rural y la obsolescencia del desarrollo agrícola como forma de vida.

Según FAO y CEPAL, existe en este fenómeno una distorsión que no permite asociar las expectativas y estrategias de los jóvenes, con el desarrollo económico y social de sus entornos locales de origen. Los proyectos de vida de los y las jóvenes rurales van en consonancia con la ampliación de las oportunidades educativas, el acceso a nuevas tecnologías y el ejercicio cada vez más amplio de sus derechos, pero al parecer ninguna de estos beneficios se vislumbra como posibilidad en el entorno rural, sino más bien por fuera de él. Esta situación no sólo se debe al avance de una transición productiva hacia la terciarización, sino que también a la poca atención que han otorgado los programas sociales a los jóvenes como actores clave para la revitalización del campo (CEPAL; 1998). En este sentido, se destaca la importancia potencial que puede tener el empleo rural no agrícola para los jóvenes rurales; puesto que éste es más capaz de integrar a jóvenes con mayor calificación en su actividad. Sin embargo, el desarrollo de este tipo de empleo requiere de todas maneras de condiciones básicas, como una agricultura fuerte o un motor de recursos primarios consolidado, y una buena infraestructura física y social; lo que no es el caso en una gran parte de las zonas rurales de la región.

La educación debiera entonces ser concebida como un aporte y no como una vía de escape, sobretodo si se piensa que la apertura comercial de los países requiere que los sectores más vulnerables se encuentren preparados para asumir un cúmulo de nuevas situaciones, para las cuáles hay que apropiarse de nuevos recursos como la creatividad y las tecnologías de la información. Respecto a este punto, debido a su mayor formación, los jóvenes tienen capacidades y oportunidades mayores que sus padres para enfrentar cambios bruscos.

Las orientaciones programáticas que se proponen en la región de América Latina y el Caribe dicen relación con la creación y/o el fortalecimiento de las capacidades de las juventudes rurales, para que puedan tomar un papel protagónico y central en los procesos de integración económica. En aquellos lugares en que recién están impactando los ajustes estructurales la vía parece ser la generación de empleos de emergencia en respuesta a la recesión provocada por las políticas de shock. En el caso de países o zonas en donde la eliminación de barreras ya lleva un tiempo más largo, se recomienda fortalecer en los jóvenes la capacidad de gestión, el afianzamiento del trabajo asalariado y las empresas comunitarias asociativas. En todas estas instancias, el protagonismo juvenil tiene una relevancia central, puesto que son sus nuevas capacidades las que deben aprovecharse y no dejarse fácilmente a la fuga.

De esta forma, en su mayor parte, los programas sociales dedicados al desarrollo rural de la región han parcelado a la juventud y al desarrollo productivo, no tomándose en cuenta el papel decisivo que pueden tener los jóvenes para incorporar innovaciones productivas debido a sus mejores condiciones educacionales y flexibilidad ante nuevas ideas y propuestas (CEPAL; 2002). En términos de capital cultural, estos jóvenes estarían mejor posicionados que sus padres para internalizar y aplicar cambios en pos de una mayor productividad, pero además de las capacitación técnica, la población joven podría aprender habilidades de gestión y organización que harían posible un potenciamiento aún mayor.

Según lo que se puede observar en el tipo de políticas públicas adoptadas para jóvenes rurales, en América Latina y el Caribe, éstos no logran capitalizar los aportes potenciales que efectivamente tienen debido a su escasa visibilidad como actor relevante. Las oportunidades para las juventudes rurales se han visto seriamente limitadas, por la poca importancia dada a su posición estructural a medio camino entre la economía agraria de baja productividad y las emergentes formas de hacer las cosas que ha abierto la innovación tecnológica. El éxodo juvenil desde las áreas rurales ha sido interpretado como una muestra de la decadencia del mundo campesino, pero no como una oportunidad efectiva para los contextos locales.

Juventud Rural en Colombia

Los grandes procesos socio-demográficos y económicos que hoy enfrenta América Latina, adquieren diversos matices de país en país, y las estrategias y problemáticas también tienen precisiones específicas que deben ser abordadas bajo un enfoque específico para cada situación. En el caso de la realidad colombiana, cuando se habla de juventudes rurales, existen ciertos énfasis que no tienen tanta presencia en otros países como por ejemplo cuando se tocan temas como la violencia y la etnia; que para esta nación en particular aportan una variedad adicional, a los problemas clásicos del desempleo y la pobreza. En este sentido, una de las características más relevantes de los desafíos de la juventud en Colombia, dice relación con la importancia que ha tenido el transcurso histórico para generar dinámicas de exclusión social que superan ampliamente la mera falta de oportunidades

1.- Características sociodemográficas de la juventud rural en Colombia

Según el último censo nacional, realizado el año 2005, la población colombiana que se encuentra en el rango de edad 15-29, asciende a 10.856.360 habitantes, lo que corresponde al 26,2% de la población total del país. De esos jóvenes, existen en Colombia unos 2.476.864 que viven fuera de las cabeceras municipales, lo que equivale decir, que son jóvenes rurales. En relación con la población total a nivel nacional, la juventud rural llega a representar el 5,97%, y respecto a la población rural a nivel nacional, su importancia relativa es del 24,9%; un poco más baja que la proporción urbana.

La juventud rural presenta una diferencia notable respecto a su homóloga urbana en cuanto a la estructura por sexos. Mientras que mujeres y hombres de las zonas urbanas se distribuyen en 48,1% y 51,9% respectivamente; la relación es inversa para las juventudes rurales que dan 53,1% de hombres y 46,9% de mujeres. Actualmente, el campo colombiano está en presencia de una masculinización de su población producto de la emigración de contingentes femeninos hacia las ciudades en búsqueda de mejores oportunidades laborales. Según el modelo de transición demográfica, esta tendencia también se ve aparejada por la disminución de las tasas de fecundidad que influyen en el envejecimiento de la población. En el caso colombiano, la estructura de edades a nivel nacional aun se encuentra en una fase muy temprana de transición, y a nivel rural, la pirámide poblacional continúa siendo expansiva.

Respecto a la fecundidad juvenil, existe un dato también proveniente del Censo que dice relación con el aporte del embarazo en sectores rurales. Este alcanza un 26,9%, sumando a las jóvenes que ya tienen hijos con las que en ese entonces se encontraban embarazadas. En comparación con las áreas urbanas que para la misma fecha tenían un porcentaje del 18,5%, las zonas rurales de Colombia además tienden a disminuir su número de mujeres, lo que estaría significando probablemente que las jóvenes que se quedan en el campo, tienden también a comenzar tempranamente a criar hijos.

Otro aspecto demográfico a considerar como relevante para la caracterización, es el de la etnia. Según los datos censales, la suma de población indígena, negra (afro-colombiana) y otros grupos pequeños, logran representar el 23,9% de la juventud rural del país. La presencia juvenil indígena en las zonas rurales es de 283.309 habitantes, superando por lejos a la suma de todos los

indígenas que viven en zonas urbanas (81.936). Por su lado la población afro colombiana tiene mayor presencia urbana que rural, pero aun así logra superar a la población indígena en los sectores rurales con 304.983 habitantes. Ambos grupos étnicos tienen un comportamiento demográfico sincrónico al lugar donde residen, en cuyo caso significa que en los sectores urbanos estén experimentando un incipiente envejecimiento y en los sectores rurales aun tengan pirámides poblacionales expansivas.

El hecho de que casi la cuarta parte de los jóvenes rurales de Colombia afirme una pertenencia étnica no es un tema que debe tomarse a la ligera. La posibilidad de comprender mejor temas como la inserción laboral y la integración en el sistema educativo, se amplía mucho más tomando en cuenta los lazos más básicos con los que se inserta el joven rural y cuáles son las tensiones y oportunidades que ofrece su pertenencia étnica para el desarrollo local. De ese modo también pueden abordarse dimensiones complementarias de la exclusión social en conjunto con la distinción urbano/rural, el género y la clase social.

2.- Educación y trabajo

El panorama educacional que puede vislumbrarse en los datos censales de las zonas rurales, no hace más que afirmar lo recién mencionado sobre los índices de fecundidad. En la medida que hay menor acceso a recursos como la educación, las tasas de fecundidad, sobre todo en jóvenes adolescentes tienden a mantenerse altas y a no dar paso a la transición demográfica. No obstante, más allá de las consideraciones teóricas, los datos educacionales dan cuenta de barreras profundas en el sistema educacional colombiano para los jóvenes rurales.

Por ejemplo, mientras en el rango 12-17 años, los niveles de asistencia a clases en las zonas urbanas alcanzan un sorprendente 81,5% entre hombres y mujeres; la cifra para jóvenes rurales alcanza el 61,3%, mientras que la no asistencia llega al 35,7%. Las jóvenes rurales que afirman asistir llegan al 63,8% contra un 59,2% de los varones. Pese a las diferencias, la brecha de cobertura en comparación con las cabeceras municipales o áreas urbanas se empina por encima de los veinte puntos porcentuales, lo cual indica un problema profundo de desigualdad de oportunidades entre los jóvenes colombianos. Más sorprendente que la brecha entre urbanos y rurales, resulta el hecho de que la educación correspondiente a este rango de edad ni siquiera es de niveles especializados o profesionales sino que abarca habilidades básicas mínimas para una inserción futura en el mercado laboral.

Tan preocupante como la situación desigual de la educación secundaria, es la precaria cobertura de demanda educativa para los jóvenes ubicados en el rango de edad 18-24. En este punto, las mujeres siguen siendo más persistentes que los hombres, pero su participación llega apenas al 13,1% contra el 12,4% de los varones. Las zonas urbanas también poseen niveles bajos de participación educativa en este segmento, pero igualmente vuelven a estar muy por encima de los jóvenes rurales de Colombia alcanzando un 30,6% entre hombres y mujeres. Un diagnóstico interesante al respecto a estos datos, dice relación con la escasa capacitación de capital humano que se está desarrollando en áreas tan vulnerables como las rurales, en el sentido que Colombia es uno de los países que más reformas fiscales ha desarrollado en América latina en el último tiempo (CEPAL, 1998), teniendo además relaciones estratégicas de gran envergadura en el ámbito internacional.

La integración de Colombia mediante las reformas corre serios riesgos de fracasar si no resuelve problemas de amplia exclusión del mundo rural, tal y como se ha visto con el caso de la educación. El papel central de las juventudes como las bisagras humanas del desarrollo local en confluencia con lo global, se ve seriamente comprometido y estancado, debido a la pronunciada falta de capacidades mínimas para el aprovechamiento de las oportunidades y el enfrentamiento de los desafíos económicos y sociales emergentes.

Este proceso en el cuál la educación debe tomar un rol preponderante está sujeto a condiciones estructurales muy fuertes como la privatización de los servicios públicos, que a la larga hacen que la educación se convierta en un bien difícil de adquirir. Por su lado la reducción de las responsabilidades estatales no resulta compatible ni coherente con los objetivos de desarrollo en economía abierta, pues al tiempo que se requiere de una masificación de habilidades tecnológicas y capacidades nuevas de gestión; las posibilidades de acceso de los actores clave es relativamente incierta sino poco probable.

CEPAL subraya que los países que sufren de los ajustes propios de la transición productiva, deben poner en primera línea a un sistema educativo en sintonía con los cambios, que a su tiempo asegure herramientas básicas a los más vulnerables. Así, en un momento posterior la innovación productiva para los sectores rurales puede incluir a actores ya integrados y consolidados en las realidades locales, permitiendo aprovechar las potencialidades del capital humano existente.

Para el año 1997 la CEPAL estimaba que los jóvenes trabajadores rurales, se estaban desempeñando en su gran mayoría en el sector agrícola, alcanzando un porcentaje del 60,5% contra un 39 % de jóvenes que trabajaba en otros ámbitos. Sin embargo cabe señalar una distinción de género muy relevante al respecto en esa época, en donde las mujeres sólo se incorporaban en un 24,9% a labores agrícolas versus el 71,7% de los hombres. La tendencia en casi todos los países es similar, y confirma el supuesto de que los capitales educativos que se están adquiriendo cada vez más, no están retornando al agro, sino que se fugan hacia sectores productivos urbanos.

Desde el 60,5% que presentaba el trabajo agrícola juvenil en 1997, no han surgido variaciones significativas al respecto en la actualidad. Recientemente para el año 2006, el trabajo agropecuario representó el 61,8% de la fuerza laboral juvenil de los sectores rurales de Colombia, ubicándose muy por detrás con un 12,6% el rubro comercial hotelero y gastronómico y luego con un 9,9% los servicios comunales y sociales. Los porcentajes de participación en el trabajo agropecuario se concentran de forma especial en el grupo de menores de 18 años con un 69,6%, y en los mayores de 27 años con un 61,7%; en tanto que el grupo intermedio de 18 a 26 años tiene una participación del 58,9%.

Si se miran las tasas de informalidad y subempleo para el año 2006, puede notarse que esas condiciones precarias tienen una importancia muy grande en los volúmenes de población trabajadora. El subempleo alcanza sus niveles más altos para el rango 18-26 años, llegando al 25,74% en jóvenes rurales. La informalidad por su parte al 63,5 % para menores de 18 años y a un 38,7% en el rango 18-26; para luego volver a subir al 50,3% en mayores de 27 años. Si bien las oscilaciones por rango de edad tienen la misma dirección tanto para hombres como para mujeres; se puede observar que para estas últimas las tasas son siempre mayores, llegando a estar en el grupo de menores de 18 años, al nivel del 75,8%.

Si bien los datos de informalidad no están desagregados por el criterio urbano/rural, existe variada información en torno a la condición inestable del trabajo juvenil en el campo; afectado muchas veces por las variaciones de precio y la estacionalidad que dificultan el establecimiento de lazos laborales seguros. En el caso de las mujeres, la informalidad se expresa en los trabajos domésticos y del sector servicios en el que se incorporan. La escasa capacitación y formación de competencias laborales, se traduce generalmente en informalidad, en la medida que los trabajos no calificados consisten en tareas de baja productividad y de poca centralidad para empleadores grandes. El escaso capital agregado de estas actividades hacen que su status laboral sea considerado como un ámbito flexible y cuantitativamente prescindible dependiendo de las variaciones de costos en el mercado.

El desempleo juvenil en las zonas rurales de Colombia, también tiende a mostrar su cara más dura al interior del rango 18-26 años, que para el 2006 alcanzó un 22,7%, y para los menores de 18 años un 17,35%. Los mayores de 27 años, a pesar de emplearse predominantemente en el sector informal, poseen una tasa de desempleo del 8,2% para el mismo año. La informalidad parece volverse una condición estratégicamente beneficiosa para obtener estabilidad en los jóvenes de mayor edad, debido a que poseen en su mayoría trabajos de este tipo y sus índices de desempleo son mucho menores que los otros jóvenes.

En todas sus aristas, la realidad laboral en las áreas rurales se encuentra débilmente relacionada con el ámbito educacional, el cuál a su vez está blindado de barreras de acceso que difícilmente permiten el potenciamiento de las capacidades de los jóvenes para el desarrollo de las economías locales. La posición laboral femenina predominantemente informal, es una muestra clara de la poca integración de las habilidades de la escuela al interior de las actividades productivas, dado que son ellas las que en promedio poseen mejores niveles de calificación. Aún tomando un empleo en el sector servicios, la mujer no logra adquirir una estabilidad laboral mejor que el hombre dado que la misma condición de vivir en el campo, le exige además otro tipo de responsabilidades. La distinción que ocurre con las jóvenes rurales que emigran a zonas urbanas, es que estas últimas deciden postergar los arreglos familiares y se permiten mayores niveles de autonomía, en contraste con la mujer joven que permanece en el campo, que generalmente estudió muy poco y ha empezado un proyecto familiar.

3.- Condiciones materiales

La privatización de servicios básicos como salud y educación, ha sido la tónica de la estrategia de desarrollo impulsada por el gobierno colombiano. La asignación de este tipo de recursos por medio del mercado, resulta especialmente desfavorable para sectores que no están integrados o que presentan índices más altos de vulnerabilidad como ocurre con las mujeres, los jóvenes y los sectores rurales. Estas tres categorías se encuentran en Colombia fuertemente atadas a barreras culturales, políticas, económicas y sociales muy fuertes, lo que lamentablemente las convierte más en un lastre que en un beneficio para quién las posee.

Según un boletín elaborado por el DANE en base el Censo del 2005, el 53,4% del total de los hogares rurales de Colombia presentan una o más necesidades básicas insatisfechas, llegando incluso a cifras específicas locales que van muy por encima como 91,9% en el departamento de La guajira, 80,5% en Guainía y 76,5% en Córdoba. Las cifras revelan al respecto, que 19 de los 33 departamentos censados, presentaron porcentajes de hogares con necesidades insatisfechas

superiores al 50%. Esto significa en la práctica que una proporción importante de la población rural en Colombia, habita en condiciones de pobreza que van muy por debajo del nivel de vida estándar en las ciudades.

De acuerdo a la construcción de este indicador de pobreza, la carencia de condiciones básicas implica tener viviendas inadecuadas para vivir, niveles de hacinamiento crítico, servicios inadecuados (agua, electricidad, alcantarillas), una dependencia económica muy alta y niños que no van a la escuela. La significativa diferencia que existe para este indicador entre sectores rurales y urbanos (cabeceras municipales) no deja de llamar la atención por su magnitud. Mientras que a nivel rural la cifra nacional de hogares con este tipo de necesidades insatisfechas superaba el 50%, en los hogares urbanos la cifra alcanza un 19,6% en todo el país. Mientras que en educación secundaria se tenía una brecha del 20%, la pobreza la amplía a más del 30%.

Estos datos sin embargo, no logran dar cuenta de la magnitud de la pobreza y la indigencia específica de los jóvenes en las zonas rurales, dado que se habla en términos de población total. Según el DANE, para el año 2004, la cantidad de personas jóvenes bajo la línea de la pobreza y la indigencia, esto es, personas que no logran ingresos per cápita suficientes para cubrir una canasta básica, va muy por encima del 53,4% de la cifra integrada de todos los rangos de edad.

La pobreza rural en menores de 18 años llega a un 37,7% mientras que la indigencia alcanza el 51,5% sumando en total el 88,8% de la población juvenil rural. Para el rango 18-26, la situación es más o menos similar, llegando la pobreza al 35,5% y la indigencia al 47,5%. Finalmente para mayores de 27 años, la pobreza abarca un 36,4% de los jóvenes, y la indigencia un 52,9%. Puede notarse desde los datos, la inclinación mayoritaria hacia la indigencia más que a la pobreza, en oposición a los sectores urbanos donde hay más pobreza que indigencia para las mismas edades.

Otro efecto asociado a las condiciones materiales y la pobreza, es lo que refiere a la calidad de la alimentación de las personas. Si bien no existen datos específicos sobre jóvenes rurales, hay datos sobre el porcentaje de niños menores de 5 años con diversos grados de desnutrición. Si se asume que este tipo de asuntos por estar sujetos a condiciones estructurales de la distribución de recursos, no es muy remoto decir que los niveles de desnutrición de estos jóvenes en sus primeros años de vida haya sido similar o incluso levemente superior. La brecha urbano rural nuevamente logra expresarse en este dato, teniendo en consideración que la desnutrición global es de 5,6% para las cabeceras y 9,7% para los sectores rurales. Lo que expresa esta diferencia se relaciona con las desigualdades de origen a las que han estado expuestos los jóvenes rurales de Colombia, que además de tener menos vínculos con la protección social, se encuentran en condiciones físicas desventajosas que afectan el potenciamiento de sus capacidades.

Por otro lado, las barreras de ingreso a un sistema educacional que se privatiza hacen que la salida a estas condiciones materiales de pobreza e indigencia sea un asunto mucho más difícil, por lo que suena a simple vista razonable la emigración a sectores urbanos en búsqueda de posibilidades más amplias. La inserción laboral precaria entre los y las jóvenes rurales es un aspecto que refleja la inexistencia de reforzamiento de capital humano y la ineficiencia del sistema educativo para integrarse en una relación de mutuo beneficio con las realidades locales. Los retornos económicos que los jóvenes rurales logran sacar de su fuerza laboral, muestran ser

insuficientes para cubrir necesidades básicas aun cuando postergan paulatinamente la formación de familia.

4.- Violencia, exclusión y derechos

Según una encuesta nacional de la juventud (2000) realizada por el gobierno colombiano a 1.021 jóvenes en todo el país; una de las motivaciones que más se atribuyeron a los jóvenes que se unían a la guerrilla tenía que ver con problemas económicos y sociales. Del total de encuestados, solo un 21% señaló que la guerrilla obligaba a las personas a reclutarse, mientras que un 45% pensaba que lo hacían por necesidad y un 22% por falta de educación.

El problema de la violencia política en Colombia es un tema nacional de primera línea, en donde el terrorismo representa una de las amenazas más omnipresentes para la estabilidad política y social del país. Sin embargo, la violencia política encarnada por la guerrilla es solamente la cara más superficial de muchos problemas sociales profundos y recurrentes de la sociedad colombiana, que afectan con especial fuerza a la población juvenil. Según fuentes gubernamentales del año 2000, la guerrilla colombiana tenía reclutados unos 24.000 jóvenes entre 13 y 25 años. El involucramiento de estos contingentes en la guerrilla suele muchas veces a responder a condiciones de exclusión que vulneran los derechos básicos de los jóvenes.

La violencia como práctica de resolución de conflictos económicos y sociales en Colombia, va mucho más allá de la delincuencia común, sino que además se relaciona con estrategias mucho más avanzadas de ilegalidad, entre las que cuentan el narcotráfico, la prostitución, el secuestro y el asesinato por encargo (sicariato), además del caso extremo de la incorporación a la guerrilla. Un indicador de la práctica de la violencia, dice relación con el número de muertes violentas en un período de tiempo. Según estimaciones del gobierno colombiano, las muertes de jóvenes hombres llega a cuadruplicar a las muertes de mujeres, predominando la muerte violenta, en una edad que esta tendencia no se da en ningún otro país de la región.

Al respecto, las cifras mortuorias colombianas del censo 2005 revelan con datos duros las afirmaciones del gobierno. La trayectoria de la muerte juvenil a medida que pasan los años se muestra en la siguiente tabla:

	Total	Hombres	Mujeres	Cabeceras (Urbano)	Resto (Rural)
10-14 años	1.717	1.052	665	1.228	489
15-19 años	4.994	3.786	1.208	3.868	1.126
20-24 años	7.942	6.447	1.495	6.268	1.674
25-29 años	6.940	5.711	1.229	5.538	1.402

Fuente: elaboración propia a partir de muertes reportadas por familiares en Censo 2005

En el esquema puede notarse un comportamiento bastante homogéneo de la mortalidad juvenil, más pronunciada en varones y en sectores urbanos. Sin embargo los jóvenes rurales duplican su mortalidad en el rango 15-19 años, para luego experimentar su punto más alto en el rango 20-24 años. Al igual que todos los grupos, incluido el total nacional; una vez pasado el tercer rango de la tabla, la mortalidad decrece y tiende a mantenerse hasta la vejez. Los datos muestran que alrededor de los 15 y 19 años, los jóvenes rurales, aunque en menor proporción que los urbanos, se ven expuestos a situaciones riesgosas que no tienen que ver tanto con enfermedades y accidentes sino con violencia social.

Como se expuso anteriormente, la exclusión social que afecta actualmente a los jóvenes rurales en Colombia tiene consecuencias inmediatas en la vida cotidiana de estos, incluso determinando en no pocas ocasiones, la forma en que van a morir. La presencia de una cima de mortalidad en edades tan tempranas, confirma de forma fehaciente que los jóvenes rurales se encuentran en dinámicas de violencia que tienden a perpetuarse y enraizarse como canales de resolución de conflictos.

5.- Orientaciones de política pública para la juventud

Las múltiples formas de vulneración de derechos a la que están expuestos los jóvenes rurales en Colombia, se encuentran hoy en una situación mucho más compleja debido a los ajustes de la economía y la menor presencia del Estado como articulador de demandas sociales. Esta reducción significa en la práctica que asuntos cruciales como salud, educación y trabajo, quedan a la deriva de lógicas de mercado, en donde las necesidades no satisfechas tienden a volverse un asunto de competencia y no de gestión política.

Sin embargo a pesar de la menor injerencia del Estado, no significa que las políticas para la juventud en Colombia hayan desaparecido, sino que por el contrario se han vuelto a reformular de acuerdo a las nuevas necesidades emergentes. Tanto los problemas socioeconómicos como los que refieren a la violencia, han venido a ser una piedra de tope para el desarrollo del país, en donde la falta de oportunidades actúa como contra-cara de los nuevos procesos de inserción internacional. La persistencia de la pobreza e indigencia, sumado a la cobertura insuficiente de la educación, no han logrado posicionar a la juventud como un actor con capacidades y herramientas para enfrentar los nuevos desafíos.

Pero el escaso posicionamiento de la juventud (o su invisibilización), también se expresa al momento de las planificaciones de desarrollo rural en el país. Mientras algunos miran con pesimismo la migración y la integración a los circuitos urbanos; otros no conciben la potencialidades de los jóvenes como actores de cambio al interior de sus propias comunidades.

El gobierno Colombiano en el año 2004, estableció un marco de políticas para la juventud para diez años en donde se realiza una recapitulación de los errores pasados, las limitaciones y las acciones a realizar en el futuro. Respecto a los nuevos enfoques propuestos por la política nacional destaca el rescate del joven como sujeto de derechos, además del fortalecimiento de las capacidades institucionales superando la excesiva discontinuidad en la organización territorial.

Un aspecto crucial propuesto en la política nacional de juventud y que afecta directamente a las juventudes rurales, se refiere su posicionamiento como área transversal de las políticas públicas. En este sentido, se plantea la necesidad que haya una coordinación e integración de la temática juvenil en instancias ministeriales de diverso tipo, con el objetivo de no aislar a la política nacional de la juventud de los avances en otras áreas. No obstante y a pesar de que este enfoque muestra preocupación por la escasa vinculación de las políticas de juventud con las preocupaciones centrales del país; las juventudes rurales no aparecen como un ámbito de atención especializada con necesidades y condiciones a veces diametralmente distintas a los sectores urbanos.

Aún en materia de políticas sectoriales abunda la necesidad de ligar el desarrollo local con el papel de las nuevas generaciones, incluyendo acciones específicas como la capacitación y el desarrollo de capital humano. Para ello el afinamiento de los diagnósticos y la inclusión de los beneficiarios en las medidas y decisiones a tomar, es un aspecto que puede resultar sumamente provechoso para la inclusión.

Bibliografía

- 1.- DANE (2005a) Censo General nivel nacional 2005.
- 2.- DANE (2005b) Boletín necesidades básicas insatisfechas.
- 3.- Durston John (1998). Juventud y desarrollo rural. Marco conceptual y contextual. CEPAL, Serie políticas sociales. Santiago de Chile.
- 4.- Durston John (2000). Juventud rural y desarrollo en América Latina; estereotipos y realidades. En CEPAL, división de desarrollo social. Santiago de Chile.
- 5.- Presidencia de la república de Colombia (2000) Encuesta nacional de jóvenes.
- 6.- Presidencia de la república de Colombia (2004). Política nacional de Juventud. Bases para el plan decenal de juventud 2005-2015. Bogotá D.C. Colombia.